

Roj: **STS 125/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:125**Id Cendoj: **28079130052016100013**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **5**Fecha: **22/01/2016**Nº de Recurso: **3382/2014**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **JOSE JUAN SUAY RINCON**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de dos mil dieciséis.

En el recurso de casación nº 3382/2014, interpuesto por la Entidad SPOBEG ANSTALT, representada por la Procuradora doña Ana Rayón Castilla y asistida de Letrado, contra la Sentencia nº 578/2014 dictada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, en fecha 3 de marzo de 2014, recaída en el recurso nº 678/2010 , sobre urbanismo; habiendo comparecido como parte recurrida la JUNTA DE ANDALUCÍA, representada y asistida por la Letrada de sus Servicios Jurídicos, y el EXCMO. **AYUNTAMIENTO DE MARBELLA**, representado por el Procurador don Antonio Ortega Fuentes y asistido de Letrado.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** En el proceso contencioso administrativo antes referido, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, dictó Sentencia de fecha 3 de marzo de 2014 , por cuya virtud se inadmitió el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Entidad SPOBEG ANSTALT contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, de fecha 25 de febrero de 2010, por la que se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de **Marbella**. Sin costas.

Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2014, la representación procesal de la entidad recurrente suplicó a la Sala se rectifique el error material contenido en la sentencia impugnada.

Por Auto de la Sala de instancia, de fecha 9 de julio de 2014, se acordó desestimar la pretensión ejercitada por la parte actora.

**SEGUNDO.-** Notificada esta resolución a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado mediante Diligencia de la Sala de instancia de fecha 26 de septiembre de 2014, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

**TERCERO.-** Emplazadas las partes, la recurrente (SPOBEG ANSTALT) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de noviembre de 2014 su escrito de interposición del recurso, en el cual expuso los motivos de casación y solicitó el dictado de una sentencia que declarara haber lugar al recurso de casación interpuesto, procediendo a casar y anular la sentencia impugnada, efectuando, en su lugar, como ajustados a Derecho, los siguientes pronunciamientos: Primero.- Que se declare y tenga por subsanado el requisito del artículo 45.2.d) LJCA , ordenando a la Sala de instancia que procede a dictar nueva sentencia sobre la cuestión de fondo planteada. Segundo.- En su defecto, ordenando la reposición de las actuaciones al momento inmediato anterior al de dictar sentencia, a fin de que la Sala de instancia otorgue plazo a la sociedad recurrente para que subsane el defecto procesal alegado en las contestaciones a la demanda, dictando después sentencia en función del resultado del requerimiento previo efectuado. Tercero.- Respecto de las costas, resuelva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 LJCA .



**CUARTO.-** Por Providencia de la Sala, de fecha 15 de diciembre de 2014, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por Diligencia de fecha 19 de enero de 2015 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (JUNTA DE ANDALUCÍA y EXCMO. **AYUNTAMIENTO DE MARBELLA**), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo. Siendo evacuado el trámite conferido por la Junta de Andalucía mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2015, en el que solicitó a la Sala que dictara resolución desestimatoria del recurso de casación interpuesto al resultar la sentencia plenamente ajustada a Derecho. Por su parte, el Excmo. **Ayuntamiento de Marbella** mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2015, interesó asimismo el dictado de una sentencia desestimatoria del recurso y confirmatoria en su integridad de la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas a la recurrente.

**QUINTO.-** Por Providencia se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de enero de 2016, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon, Magistrado de la Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO .-** Se impugna en el presente Recurso de Casación 3382/2014 la Sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, dictó en fecha de 3 de marzo de 2014, en su Recurso Contencioso-administrativo 678/2010 , por medio de la cual se inadmitió el formulado por la entidad mercantil SPOBEG ANSTALT, S. A. contra la Orden de 25 de febrero de 2010, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la JUNTA DE ANDALUCÍA, por la que se aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de **Marbella**.

**SEGUNDO.-** Como decimos, la Sala de instancia inadmitió el recurso contencioso administrativo formulado por la entidad mercantil SPOBEG ANSTALT, S. A., y, se fundamentó para ello, en síntesis, y, por lo que en el recurso de casación interesa, en las siguientes consideraciones que expresa en los FD 1º y 2º que a continuación transcribimos:

"PRIMERO.- Las partes codemandadas interesan la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, al amparo de lo preceptuado en el art. 69. b) en relación con el art. 45.2.d) de la Ley 29/98 al no constar que se haya adoptado por la Comunidad actora la decisión de interponer el presente recurso jurisdiccional, constando únicamente el otorgamiento por el Presidente de la misma de un poder general para pleitos, pero no la adopción de un acuerdo en tal sentido. Pues, en efecto, tal y como se desprende de las actuaciones, la recurrente no ha aportado documento alguno que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones a las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación. Y si bien es cierto que este defecto es inicialmente considerado como subsanable, el mismo se convierte en obstáculo procesal determinante de la inadmisibilidad del recurso interpuesto si el recurrente no ha procedido a su subsanación. En el presente caso, la recurrente ha tenido la oportunidad procesal de hacerlo y, sin embargo, no lo ha efectuado, por lo que es claro que procede estimar la causa de inadmisibilidad invocada al ser clara la Jurisprudencia dictada al respecto, por ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1999 , donde se recordaba que " esta Sala tiene reiteradamente declarado en sentencias como las de 26 de enero de 1.988 , 8 y 11 de junio de 1.992 , 18 de enero de 1.993 , 2 de noviembre de 1.994 , 12 y 17 de febrero , 11 de marzo , 1 de julio , 26 de octubre de 1.996 , 20 y 24 de enero , y 13 de mayo de 1.997 , 2 de febrero , 31 de marzo y 30 de abril de 1.998 , entre otras, que para el ejercicio de acciones en nombre de un ente colectivo es preciso acreditar, en caso de que se negara de contrario, que aquél ente goza de personalidad jurídica por haberse cumplido los requisitos establecidos legalmente para su válida constitución, y, además, si, como aquí, se niega por la otra parte, que se aporte la correspondiente prueba acreditativa de que existe acuerdo para el ejercicio de las correspondientes acciones, y de que tal acuerdo de impugnación ha sido adoptado por el órgano al que estatutariamente viene encomendada tal competencia y la de autorizar a las personas que han de actuar en nombre y representación del ente colectivo, pues sólo así quienes estén facultados podrán ostentar la capacidad procesal exigida por los mencionados preceptos para comparecer en juicio y para apoderar a Letrado o Procurador que haya de representarle en el proceso, por lo que, al no haberse aportado los Estatutos de la recurrente, y al no aparecer transcritos los Estatutos, en el particular requerido, en la escritura de poder para pleitos que se aportó en autos, no resultan acreditados tales extremos, faltando también referencia a acuerdo alguno. Ciertamente es, como se ha dicho, que tales defectos son subsanables, conforme al art. 129,1 de la Ley de la Jurisdicción, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se hizo entrega a la parte demandante de los escritos de contestación a la demanda en los que se denunciaban dichos defectos, y, conforme al art. 69,3 de la misma Ley , en cualquier momento posterior para desvirtuar las alegaciones de los demandados o coadyuvantes, e, incluso, al formular sus conclusiones, mas ninguna de dichas oportunidades procesales fue aprovechada por la parte demandante para subsanar tales



deficiencias u omisiones, pese a la facilidad de hacerlo acreditando adecuadamente la concurrencia de los requisitos que se echan en falta, razón por la cual obligado resulta acoger la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto, oportunamente invocada por la Administración demandada, al omitirse la indispensable justificación para tener por acreditada la capacidad procesal, sin poder entrar, por ello, en el enjuiciamiento de las cuestiones de fondo planteadas. Esta resolución, perfectamente aplicable al supuesto que nos ocupa, hace superflua cualquier otra consideración, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto, de conformidad con establecido en el art. 69. b) en relación con el art. 45.2.d) de la LJCA . EDL 1998/44323.

SEGUNDO.- Para la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de enero de 2008 , y como ya ponía de relieve la sentencia de 24 de junio de 2003 , la capacidad jurídica o capacidad para ser parte de la persona jurídica no depende sólo de su mera constitución con arreglo a Derecho, sino también de que se haya producido la formación de la voluntad de ejercitar la acción correspondiente mediante acuerdo adoptado por el órgano competente en la forma prevista por los estatutos y de que el órgano al que corresponde la representación haya otorgado el oportuno apoderamiento en favor de quien ejerza la representación directamente ante los Tribunales, para integrar el requisito de la postulación. Mientras en una persona física su mera comparecencia (o el otorgamiento del poder en favor del representante procesal, es decir, del procurador o, cuando es el caso, del abogado), es suficiente para demostrar su voluntad de recurrir, no sucede así en las personas jurídicas, respecto de las cuales es menester justificar que la voluntad de recurrir se ha formado de acuerdo con lo previsto en los estatutos por los que se rija conforme a la ley.

De ahí que el art. 45.2 d) de la Ley 29/1998 ordene que con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se presente "el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado (copia del acuerdo recurrido)". La falta de este requisito impide tener por acreditada la capacidad de la corporación que aparece como titular de la acción por defecto en la formación de la voluntad de recurrir y, en cuanto se refiere a la persona física compareciente, es susceptible de ser entendido como un defecto de "legitimatío ad causam" (legitimación para el proceso concreto) que puede dar lugar a apreciar la inadmisibilidad del recurso en la sentencia al amparo del art. 69 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - administrativa , que contempla el hecho de haberse interpuesto el recurso por persona no legitimada. Este defecto, como prevé expresamente el art. 45.3 de la Ley 29/98 puede ser subsanado al disponer que si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos anteriormente expresados o los presentados son incompletos, y en general, siempre que el Tribunal estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de diez días para que el recurrente pueda subsanar el defecto, y si no lo hace ordenará el archivo de las actuaciones. En consonancia con ello, el art. 138.2 de la misma Ley establece con carácter general que cuando el organismo jurisdiccional, de oficio, aprecie al existencia de algún defecto subsanable, dictará providencia en que lo reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación; con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia.

Y, en este orden, en la línea de superar una jurisprudencia vacilante e incluso contradictoria, la sentencia de esta Sala de 31 de enero de 2007 ha establecido que el art. 138 de la L.J.C.A . EDL 1998/44323 diferencia con toda claridad: a) El supuesto, previsto en su número 2, de que sea el propio órgano jurisdiccional el que, de oficio, aprecie la existencia de un defecto subsanable, en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. b) El supuesto, previsto en su núm. 1, en el que el defecto se alega por las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la parte que se halle en tal supuesto, o sea, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Lo que el num. 1 del art. 138 de la Ley de la Jurisdicción impone es el deber de subsanar o de combatir la alegación dentro de ese plazo de diez días, con el efecto, si así no se hace, previsto en el num. 3 del repetido art. 138, de que el recurso pueda ser decidido con fundamento en el defecto no subsanado. Una interpretación conforme con la Constitución de los núms. 1 y 3 del art. 138 no impone que el órgano jurisdiccional, en aquellos casos en que el defecto ya hubiera sido puesto de manifiesto a lo largo de las actuaciones judiciales, requiera, en todo caso, de subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión. Alegado el defecto, sólo será exigible el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el art. 24.1 de la Constitución , lo que ocurriría si la alegación no fuera clara, o si fuere combatida, bien dentro del plazo de aquellos diez días o bien en cualquier otro momento posterior. Si la alegación de la existencia del defecto fue combatida y el órgano jurisdiccional no comparte los argumentos opuestos, surge una situación en la que, como una derivación más del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, es exigible una advertencia implícita, a través del previo requerimiento, de lo infundado de esos



argumentos y de la confianza nacida de ellos de obtener una sentencia que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Fuera de estos casos, o de otros en que quepa percibir un riesgo de indefensión sin el previo requerimiento, éste no será exigible. La aplicación de la anterior doctrina no se desvirtúa por las previsiones del art. 57.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad limitada, en el que funda la parte apelante su recurso, pues en él sólo se comprenden las facultades representativas del administrador de la sociedad pero, entre esas, no está comprendida la facultad de interponer acciones, que es la que justifica la legitimación activa que exige la Ley 29/98, y que sólo corresponde al órgano societario que determine los estatutos del mismo, marco normativo que no consta en el caso de autos y sin que su plasmación concreta en favor del administrador actuante se hubiera hecho constar en el poder para pleitos que otorgó con ocasión del recurso contencioso-administrativo. Esta interpretación se confirma en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2013 y, con arreglo a la misma, se ha de hacer constar que, alegada la causa de inadmisión en las contestaciones a la demanda, la misma ni fue combatida ni fue subsanada mediante la documentación que exige el art. 45.2 de la ley de la jurisdicción sin que, por otra parte, ese defecto procesal pueda considerarse subsanado mediante el instrumento por el que se confiere el poder para pleitos pues, con el mismo, no se hace constar el acuerdo social por el que se delega la facultad para accionar ni se alega en derecho extranjero por el que deba entenderse conferida ope legis, sin que haya justificación alguna por la que deba aplicarse a las entidades extrañas un régimen más benigno que a las personas jurídicas españolas."

Por las razones que acabamos de exponer, el recurso contencioso-administrativo resultó inadmitido, sin imposición de condena en costas (FD 3º).

**TERCERO.-** Contra esa sentencia ha interpuesto la entidad recurrente recurso de casación, en el cual vino a esgrimir los cuatro motivos que a continuación dejamos también consignados:

- 1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del artículo 45.2.d) LJCA y del artículo 24 CE.
- 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales. Vulneración del artículo 45.3 LJCA, con resultado de indefensión, y de la jurisprudencia que lo aplica.
- 3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales. Vulneración del artículo 138 LJCA y de la doctrina jurisprudencial recaída sobre el mismo, con resultado de indefensión.
- 4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. La sentencia recurrida incurre en incongruencia intrínseca, por contradicción entre los razonamientos y el fallo de inadmisión, con vulneración del artículo 218 LEC.

Exigencias de orden lógico y procesal obligan a invertir el orden en el enjuiciamiento de los motivos alegados en el recurso y anteponer al examen del primero y único de ellos que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de nuestra Ley jurisdiccional el de los tres siguientes que se sustancian en cambio por la vía del artículos 88.1 c) de la misma Ley.

Por el alcance de las consecuencias que pudiera resultar de la eventual estimación de alguno de tales motivos.

**CUARTO.-** Entre los formulados al amparo del artículo 88.1 c), hemos de tratar singularmente el que se formula en tercer término, precisamente, atendiendo a las consecuencias concretas a las que conduce la estimación de dicho motivo, una estimación que, adelantémoslo ya, procede realizar en esta sentencia.

En cualquier caso, cumple indicar que los otros dos motivos igualmente invocados en el recurso por esta vía no pueden prosperar.

No hay infracción del artículo 45.3 de nuestra Ley jurisdiccional, porque este precepto no obliga a la infalibilidad del Secretario Judicial (Letrado de la Administración de Justicia) en la apreciación de la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad legalmente previstas en dicho trance procesal. Tan es así que tales causas de inadmisibilidad pueden ser apreciadas en momentos posteriores durante la sustanciación del litigio, incluso, al dictado de la propia sentencia, como ponen de manifiesto distintos preceptos integrantes de la Ley jurisdiccional; y ni que decir tiene en estos casos no cabe aducir la infracción del precepto que nos ocupa y que lo que garantiza es el examen de oficio de la concurrencia de las causas de inadmisibilidad a que se refiere dicho artículo, de manera que si se constata que dicho examen no ha tenido lugar se produciría inevitablemente la infracción del precepto; pero no así, si realizado dicho examen, no llegara a percibirse el incumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

Por otro lado, tampoco cabe apreciar la existencia de un vicio de incongruencia interna en la resolución impugnada objeto ahora de nuestro enjuiciamiento, porque concurre la correlación precisa requerida entre los



fundamentos y el fallo de la sentencia, por una parte, y, por otra parte, el debate se ajusta a las pretensiones sostenidas por las partes en el curso del litigio. Es claro que, como la sentencia impugnada afirma, las partes codemandadas interesan un pronunciamiento de inadmisibilidad sobre la base del incumplimiento del requisito establecido por el artículo 45.2 d) de nuestra Ley jurisdiccional (autorización del órgano competente de la sociedad para litigar); y en el sentido pretendido se formula el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional, que se incorpora a la parte dispositiva de la sentencia, con base en la fundamentación que la precede. La apreciación de la concurrencia de una causa de esta índole, por lo demás, determina la imposibilidad de examinar el fondo de la cuestión y de atender las pretensiones esgrimidas por las partes en torno a ella, ya que existe un óbice procesal que así lo impide y que si se aplica de forma razonable y proporcionada no es susceptible de tacha alguna.

**QUINTO.-** Centrada en su consecuencia la presente controversia en torno al tercero de los motivos de casación esgrimidos en el recurso, y en el que se invoca la vulneración del artículo 138 LJCA y de la doctrina jurisprudencial recaída sobre el mismo, con resultado de indefensión, corresponde ahora acometer, ya sin más dilación, el examen de esta cuestión.

A) Y hemos de comenzar ante todo por destacar que el motivo está correctamente planteado por la vía del artículo 88.1 c) de nuestra Ley jurisdiccional .

Según doctrina jurisprudencial consolidada, cuando lo que se denuncia en un recurso de casación es la indebida aplicación de la causa de inadmisión del recurso de contencioso-administrativo derivada del artículo 45.2.d) de nuestra Ley Jurisdiccional , y lo que está en discusión es la determinación del alcance y contenido de la carga legal de la aportación de la llamada "*autorización para recurrir*", esa es una cuestión *in iudicando* que debe plantearse al amparo del artículo 88.1.d) de dicha Ley . Por tanto, si lo que se suscita en el recurso de casación es si la parte actora tenía que dar cumplimiento a esa carga o no, o si los documentos aportados eran por sí mismos, dado su contenido, suficientes, o no, para tener por cumplida dicha carga, esa es cuestión de fondo que ha de ser invocada en casación por el cauce del precitado artículo 88.1.d).

Sin embargo, diferentemente, si lo que la parte recurrente plantea es que la Sala dictó sentencia de inadmisión sin haber ofrecido previamente el trámite de subsanación adecuado para superar la falta de cumplimiento de aquella carga, con invocación del artículo 138 de la Ley Jurisdiccional , lo que se suscita es una cuestión *in procedendo* del artículo 88.1.c), pues en tal supuesto no se debate sobre la necesidad de cumplir esa carga procesal o sobre si se ha cumplido o no en el caso concernido, sino sobre el incumplimiento del deber del Tribunal de ofrecer la posibilidad de subsanar el defecto ( Sentencias de 19 de abril y 13 de julio de 2012 y 21 de noviembre de 2013 , RC 6412/2009 , 3789/2009 y 5600/2001, entre otras con similar fundamentación y Autos de la Sección 1ª de 27 de septiembre y 25 de octubre de 2012 y 14 de noviembre de 2013 ( RC 5169/2011 , 1613/2012 y 1267/2013 ) ).

La citada jurisprudencia, actualmente consolidada, deriva, prescindiendo de antecedentes más antiguos, de la Sentencia del Pleno de esta Sala Tercera de 5 de noviembre de 2008 (RC 4755/2005 ) convocado, según se hace constar en el antecedente de hecho cuarto, a la vista de "los pronunciamientos contradictorios de diferentes secciones". Pues bien, dicha sentencia, en su fundamento jurídico tercero, precisa:

<<No constituye una interpretación incorrecta del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , aquella que defienda que al amparo de la letra d) de ese número 1 de ese artículo 88 pueden formularse motivos de casación que denuncien la infracción de la norma que regula el requisito procesal supuestamente omitido por la parte. Una cosa es este requisito procesal; y otra distinta el modo, forma, trámite o procedimiento que haya de seguir el órgano jurisdiccional para poder apreciar su omisión y decidir el litigio con fundamento en ella. Es esto último, la denuncia de infracción de las normas procesales reguladoras del modo, forma, trámite o procedimiento que haya de ser seguido, la que sí ha de formularse al amparo del artículo 88.1.c) de aquella Ley.

En el caso de autos, una cosa es la norma reguladora del requisito procesal supuestamente omitido, contenida en el artículo 45.2.d) de la repetida Ley; y otra la que regula qué trámites han de ser observados antes de decidir el litigio con fundamento en la infracción de aquella, contenida en el artículo 138 de dicha Ley , puesto en relación con el 45.3 de la misma>>.

B) Así las cosas, hemos también de indicar a continuación que es igualmente correcta la doctrina jurisprudencial a la que apela la sentencia dictada en la instancia, cuando distingue las exigencias requeridas a las personas físicas y a las jurídicas para litigar. Mientras en una persona física su mera comparecencia (o el otorgamiento del poder en favor del representante procesal, es decir, del procurador o, cuando es el caso, del abogado), es suficiente para demostrar su voluntad de recurrir, no sucede así en las personas jurídicas, respecto de las cuales es menester justificar que la voluntad de recurrir se ha formado de acuerdo con lo previsto en los estatutos por los que se rija conforme a la ley. En efecto, la capacidad jurídica o capacidad para ser parte de la persona jurídica no depende sólo de su mera constitución con arreglo a Derecho, sino

también de que se haya producido la formación de la voluntad de ejercitar la acción correspondiente mediante acuerdo adoptado por el órgano competente en la forma prevista por los estatutos y de que el órgano al que corresponde la representación haya otorgado el oportuno apoderamiento en favor de quien ejerza la representación directamente ante los Tribunales, para integrar el requisito de la postulación. De ahí que el artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998 ordene que el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se presente "el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado (copia del acuerdo recurrido)".

C) Por eso, hemos de tener por diferentes las exigencias impuestas por las letras a) y d) del artículo 45.2 de nuestra Ley jurisdiccional, como, entre tantas otras ocasiones, pusimos de manifiesto, por ejemplo, en nuestra Sentencia de 12 de abril de 2013 (RC 1543/2011):

<<La sentencia recurrida, según expusimos, rechazó la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aducida por la demandada, por considerar que en el poder para pleitos, aportado por la entidad demandante "Pkl Real Estate Agency, S.L.", el Notario considera suficiente la facultad de las personas que intervienen en nombre y representación de la sociedad limitada, para otorgar el correspondiente poder para litigar a favor de procuradores u otras personas.

Pues bien, lo que está en cuestión no es la representación de la sociedad mercantil recurrente en la instancia mediante el correspondiente poder, que regula el artículo 45.2 a) de la LJCA. Lo que echa en falta la recurrida en el proceso de instancia es la demostración de que esa persona jurídica tiene voluntad de interponer recurso contencioso administrativo, para cuya constatación se impone el deber de acompañar al escrito de interposición, ex artículo 45.2.d) de la misma Ley Jurisdiccional, el acuerdo que exprese, según sus normas estatutarias, la voluntad de ejercitar la acción.

La exigencia del acuerdo societario para litigar ha sido examinada por esta Sala del Tribunal Supremo en repetidas ocasiones, con ciertas vacilaciones respecto de su alcance, reconocemos, que han quedado zanjados tras la Sentencia del Pleno de la Sala de 5 de noviembre de 2008 (recurso de casación nº 4755/05). En esta sentencia señalamos que en la regulación contenida en la LJCA, cuando la demandante sea persona jurídica <<...ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso compete, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo".

Y explicamos, en el fundamento jurídico cuarto, que <<... Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad. Obvia es la máxima trascendencia que la acreditación de esto último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que ha de constatarse es que la persona jurídica interesada ha solicitado realmente la tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal fin, y que lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro caso se abre la posibilidad, el riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar como querido, por la entidad que figure como recurrente>>".

El artículo 45 de la LRJCA regula los requisitos de interposición del recurso contencioso-administrativo, y concretamente detalla los documentos que han de adjuntarse a dicho escrito. De estos, interesa destacar los recogidos respectivamente en los apartados a) y d) del apartado 2º del mismo. El apartado a) establece que ha de acompañarse al escrito de interposición *"el documento que acredite la representación del compareciente"* (esto es, generalmente el poder de representación), mientras que el apartado d) apunta la necesidad de aportar asimismo *"el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado"*.

Estos apartados de la Ley Jurisdiccional 29/1998 contemplan por separado ambas exigencias, y así, el apartado a) de su art. 45.2 requiere a la parte recurrente la aportación del documento acreditativo de la *representación* con la que la representación procesal de la parte actora comparece en juicio, mientras que el apartado d) pide a esta misma parte algo más, a saber, la acreditación documental de que la decisión de litigar,

de promover el recurso, ha sido adoptada por el órgano que tiene atribuida tal competencia de *administración* de los asuntos societarios.

Desde esta perspectiva, el artículo 45.2 de la LRJCA , adquiere una razón de lógica jurídica. Si el apartado d) de este precepto se refiriera únicamente, al igual que el a), al ámbito de la representación de la empresa, sería redundante y superfluo, pues esa representación ya ha quedado acreditada a través del documento exigido por el apartado a). Justamente al contrario, esto es, porque uno y otro apartado se refieren a momentos y ámbitos diferentes (el apartado a) al de la representación de la empresa y actos con trascendencia *ad extra* , el apartado d) al de la gestión interna de la empresa), cobra pleno sentido que uno y otro apartado se refieran a la acreditación documental de aspectos distintos. Sólo así se explica la coexistencia de ambos apartados en el mismo precepto y referidos a la misma actuación procesal. Más aún, si el propio apartado d) del artículo 45.2 matiza que no será exigible el acuerdo autorizatorio del ejercicio de acciones cuando ya conste incorporado en el texto del poder, es porque parte de la base de que ese acuerdo es distinto del poder de representación, y uno y otro documento tienen contenido y finalidad distintas.

Esta ha sido, precisamente, la línea en que se ha movido la jurisprudencia, que en una doctrina constante ha remarcado que hay que distinguir entre el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado, y la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que ha de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien sus normas reguladoras atribuyan tal facultad, y que como tal ha de quedar documentalmente acreditada.

D) En aplicación del artículo 45.2 d) de nuestra Ley jurisdiccional , acierta también la sentencia impugnada en diferenciar la existencia de dos situaciones, atendiendo al artículo 138 de nuestra Ley jurisdiccional . Precisamente el objeto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2008 (RC 4755/2005 ), dictado por el Pleno de la Sala, va derechamente encaminado a esclarecer esta cuestión y unificar el criterio de todas sus secciones. Viene así la indicada resolución a establecer:

<<"Son así las normas de ese artículo 138, más la del artículo 24.1 de la Constitución en el particular en que proscribe toda situación de indefensión, las que rigen la cuestión que finalmente tenemos que decidir, cual es si la Sala de instancia podía, sin previo requerimiento de subsanación, apreciar la causa de inadmisibilidad que en efecto concurra.

Sin desconocer que este Tribunal Supremo ha dictado sentencias en sentido contrario (así, entre otras, las de 10 de marzo de 2004 ( RJ 2004, 3165), 9 de febrero de 2005 ( RJ 2005, 1401), 19 de diciembre de 2006 (RJ 2006, 9929 ) o 26 de marzo de 2007 (RJ 2007, 2631) y las que en ellas se citan), pero también otras concordantes con la que ahora se dicta (así, por ejemplo, las de 21 de febrero y 5 de septiembre de 2006, 27 de junio de 2006 (RJ 2006, 4540), 31 de enero de 2007 (RJ 2007, 289) o 29 de enero de 2008 (RJ 2008, 443), es la respuesta afirmativa la que debe imponerse en un supuesto definido y delimitado por actos procesales como aquellos de los que dimos cuenta en el fundamento de derecho primero de esta sentencia.

Aquél artículo 138 diferencia con toda claridad dos situaciones. Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable, en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite sin más trámite que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo.

Pero no es sólo que la literalidad del precepto diferencie esas dos situaciones y que para ambas, para una y otra una vez agotada su respectiva descripción, prevea sin necesidad de más trámite el efecto común que dispone su número 3. Es también la regla lógica que rechaza toda interpretación que conduzca a hacer inútil o innecesaria la norma, la que abona nuestra respuesta de que en un caso como el de autos no era obligado que el órgano judicial hiciera un previo requerimiento de subsanación. Si este hubiera de hacerse también en la situación descrita en el número 1 de aquel artículo, la norma en el contenido sobraría en realidad, pues sin necesidad de construir un precepto cuya estructura es la de separar en números sucesivos situaciones distintas, le habría bastado al legislador con disponer en uno solo que apreciada la existencia de algún defecto subsanable, bien de oficio, bien tras la alegación de parte, se actuara en el modo que dice el número 2 del repetido artículo 138.

Además y por último, una interpretación conforme con la Constitución de los números 1 y 3 de dicho artículo no impone que el órgano jurisdiccional, habiéndose alegado el defecto en el curso del proceso, requiera en todo caso de subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión. Alegado el defecto, sólo será exigible

el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución . Situación que debe ser descartada en un supuesto como lo es el de autos, en el que la parte demandante revocó con claridad la causa de inadmisibilidad que alegaba y en el que la parte actora tuvo ocasión, por brindarla el curso sucesivo del proceso, de oponer lo que estimara pertinente. Tal es también la conclusión que cabe ver, por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Constitucional 266/1994, de 3 de octubre (RTC 1994,265)>>.

E) En lo que yerra la sentencia impugnada es en la aplicación de la doctrina general establecida a propósito del artículo 45.2 d) de nuestra Ley jurisdiccional , en su relación con el artículo 138, es en su aplicación al supuesto de autos.

Cuando del examen de las actuaciones, en efecto, se comprueba que el escrito de interposición del recurso de PGOBEG ya venía acompañado de la escritura de apoderamiento al representante, otorgada en Vaduz (Liechtenstein) el 19 de mayo de 2010, y en tal documento, en su párrafo final, se decía, a los efectos del requisito controvertido y con cita del artículo 45.2.d) LJCA , "que el órgano de administración de la sociedad poderdante, "SPOBEG ANSTALT", ha acordado la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía del Plan General de Ordenación Urbana de **Marbella**".

Acaso por la expresada razón es por lo que, en el examen de oficio que a continuación cumple realizar al Secretario Judicial (Letrado de la Administración de Justicia) de la concurrencia de alguna de las causas determinantes de la inadmisibilidad del recurso no advirtiera la concurrencia de causa alguna en dicho sentido.

Es lo cierto, que con posterioridad, como ya hemos dejado indicado también, las partes codemandadas interesaron un pronunciamiento de inadmisibilidad sobre la base del incumplimiento del requisito establecido por el artículo 45.2 d) de la Ley.

Sin embargo, y esto es lo auténticamente decisivo a los efectos de la prosperabilidad de este recurso, con posterioridad la parte recurrente no permaneció inactiva y en su escrito fechado el 15 de febrero de 2012 aprovechó el trance de la proposición de prueba para manifestar: "Antes de la proposición de prueba, y atendiendo a las manifestaciones contenidas en los escritos de contestación a la demanda presentados de contrario por las administraciones demandadas, y que hacen referencia a una causa de inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado el documento exigido en el art. 45.2.d de la LJCA , quiero manifestar que mi representada es una compañía constituida y domiciliada en Liechtenstein, bajo su normativa estatal. Que en esta normativa, no se requiere un acuerdo del órgano de administración previo a entablar acciones judiciales, por lo que no resulta de aplicación el requisito denunciado por las demandadas. No obstante, y con la finalidad de despejar cualquier duda respecto a la correcta configuración de la relación procesal, por parte del representante legal de la compañía Spobeg Anstalt, se ha emitido la certificación que se acompaña como anexo A al presente escrito, en la que se recoge el acuerdo previo del órgano de gobierno a la presentación de la demanda, todo ello a efectos de que quede subsanado cualquier defecto que por Sala pudiera observarse en la demanda inicialmente admitida". Consta en efecto la siguiente certificación como anexo:

"Yo, Andreas Shurti, mayor de edad, actuando en mi condición de representante legal de "SPOBEG ANSTALT", entidad debidamente constituida y vigente con arreglo al Derecho del Principado de Liechtenstein, con domicilio social en Zollstrasse 9, Postfach 1611, FL9490 (Vaduz),

#### CERTIFICO POR LA PRESENTE

Primero.- Que ni el Derecho aplicable del Principado de Liechtenstein ni las normas internas de "SPOBEG ANSTALT" exigen que la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas sea previamente aprobada por sus órganos de gobierno internos, aparte de por los administradores encargados de dirigir la marcha ordinaria de sus actividades.

Segundo.- Que, no obstante lo anterior, la decisión de interponer un recurso en nombre de "SPOBEG ANSTALT" contra la resolución de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de fecha 25 de febrero de 2010, por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de **Marbella**, fue previamente adoptada por los órganos de gobierno internos de "SPOBEG ANSTALT".

La presente certificación se emite a todos los efectos legales y específicamente con objeto de cumplir con lo previsto en el art. 45.2.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en Vaduz (Liechtenstein), a 13 de febrero de 2012".

De este modo, la entidad recurrente vino a satisfacer la carga procesal que pesaba sobre ella. Esto es, no permaneció pasiva o inactiva, sino que reaccionó jurídicamente, combatiendo expresamente la causa de inadmisibilidad y aportando el documento que estimaba suficiente para entender cumplido el requisito, lo que hizo en su escrito de proposición de prueba; siendo así que fue la Sala a quo quien se limitó a unir el documento



a los autos sin dar traslado del mismo a las demás partes, y sin pronunciarse sobre la suficiencia o insuficiencia del mismo a los fines contemplados. Porque, como recordamos en nuestra Sentencia de 25 de julio de 2013 (RC 3411/2010 ), con cita en la precedente Sentencia de 16 de julio de 2012 (RC 2043/2010 ), procede de entrada diferenciar las dos situaciones que ya sabemos:

<<Por lo que respecta a la subsanabilidad de la falta de aportación inicial de la documentación exigida por el artículo 45.2.d) de la LRJCA el artículo 138 LRJCA diferencia con toda claridad dos situaciones. Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable; en cuyo caso, necesariamente, el Secretario judicial ha de dictar diligencia de ordenación reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite sin más trámite que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo. Así pues, no es sólo que la literalidad del precepto diferencie esas dos situaciones y que para ambas, para una y otra una vez agotada su respectiva descripción, prevea sin necesidad de más trámite el efecto común que dispone su número 3. Es también la regla lógica que rechaza toda interpretación que conduzca a hacer inútil o innecesaria la norma, la que abona la conclusión de que en el supuesto contemplado en el número 1 precitado, no resulta obligado que el órgano judicial haga un previo requerimiento de subsanación. Consiguientemente, el Tribunal habrá de requerir expresa y necesariamente de subsanación cuando sea el propio Tribunal el que de oficio aprecie esta circunstancia (sentencia del Pleno de la Sala de 5 de noviembre de 2008 , ya citada)>>.

Pero, como decíamos entonces, "Apunta esta sentencia otro caso en que procede formular el requerimiento, aunque sin relevancia para el supuesto que nos ocupa". No la tenía relevancia dicho supuesto en dicha ocasión, pero sí la tiene ahora:

<<Nuestra jurisprudencia ha puntualizado que el requerimiento de subsanación del Tribunal resultara también necesario cuando sin él pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución ; lo que ocurriría si la alegación de la contraparte no fuera clara, o si fue combatida, bien dentro del plazo de aquellos diez días, bien en cualquier otro momento posterior; **pues si fue combatida y el órgano jurisdiccional no comparte los argumentos opuestos, surge una situación en la que, como una derivación más del contenido normal del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es exigible una advertencia implícita, a través del previo requerimiento, de lo infundado de esos argumentos y de la confianza nacida de ellos de obtener una sentencia que, como demanda aquel contenido normal, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión litigiosa** ( Sentencia de 20 de enero de 2012, (Casación 6878/2009 ))>>.

En el supuesto de autos, como decimos, la entidad recurrente no se mantuvo pasiva y reaccionó frente al alegato de inadmisibilidad efectuado de contrario y de este modo procede lo que indicamos también en nuestra Sentencia de 12 de abril de 2013 RC 1543/2011 que en estos casos:

<<... ha de requerirse a la recurrente, al entenderse que se trata de un requisito subsanable, a diferencia de lo que acontece cuando se denuncia tal defecto y la parte guarda silencio al respecto, que es caso que resolvimos en Sentencia del Pleno de 5 de noviembre de 2008 antes citada>>.

Y la falta de requerimiento de subsanación en estos casos viene a producir indefensión, al contrario de lo que hubiera sucedido de haber permanecido en la inactividad (en este supuesto, también cabría formular el requerimiento y por tanto nada cabe reprochar si se produce, aunque no habría ya obligación de hacerlo y no se produciría indefensión), según señalamos también en nuestra Sentencia de 31 de mayo de 2013 RC 1669/2010 :

<<... la falta de requerimiento de subsanación por la Sala es susceptible de provocar indefensión cuando la alegación del defecto procesal fue combatida y el órgano jurisdiccional no comparte los argumentos opuestos por la parte recurrente>>.

En el mismo sentido, recientemente, la STC 186/2015, de 21 de septiembre .

Y es en definitiva lo sucedido en el supuesto sometido ahora a nuestro enjuiciamiento. Cumple por virtud de cuanto antecede acoger el motivo examinado.

**SEXTO.-** Determinada la procedencia de estimar el presente recurso de casación por apreciar la concurrencia de la infracción denunciada como tercer motivo por la vía del artículo 88.1 c) de nuestra Ley jurisdiccional , las consecuencias concretas resultantes derivan de lo asimismo dispuesto por esta Ley, que establece al respecto una clara diferenciación.

En efecto, mientras la del apartado d) obliga a la Sala a resolver el recurso "dentro de los términos en que aparece planteado el debate", la apreciación de la existencia de infracciones procesales, salvo las reguladoras de la sentencia, a que se refiere el apartado c), comporta, además de la anulación de la sentencia, la reposición de las actuaciones "al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta", con el fin precisamente de subsanar el defecto causante de indefensión ( art. 95.2.c ) y d) de la LRJCA ). Esto último es, pues, lo que procede acordar ahora respecto del supuesto sometido a nuestro enjuiciamiento, en definitiva, anular la sentencia impugnada y devolver las actuaciones a la Sala de instancia a fin de que, con anterioridad al dictado de la sentencia, se habilite un trámite para que la entidad recurrente pueda subsanar el defecto observado, o bien, exponer las razones por las que considera suficientemente cumplido dicho trámite. Solo tras este ofrecimiento podrá en su caso llegar a acordarse la inadmisibilidad del recurso.

Es obvio, por lo demás, que la anulación de la sentencia trae consigo la anulación de la ulterior resolución por medio de la cual la Sala resuelve asimismo el incidente de nulidad suscitado contra aquella (Auto de 9 de julio de 2014 o 2012), y por medio del cual tenía por insuficiente el documento aportado, cuando, por lo demás, la " *ratio decidendi* " de la sentencia impugnada residía más exactamente en la supuesta pasividad de la entidad recurrente, que, según se aduce incorrectamente, no desplegó actividad alguna ni en el momento de interponer el recurso ni con posterioridad cuando se suscitó la inadmisibilidad del recurso por las administraciones codemandadas en orden a tener por cumplimentada la exigencia dispuesta por el artículo 45.2 d) de nuestra Ley jurisdiccional , cuando, de acuerdo con lo expuesto, lejos está de ser ello así y más exactamente lo que resulta de lo actuado es que la pasividad es del órgano jurisdiccional, que no dio ocasión a plantear el incidente antes de acordar la inadmisibilidad del recurso por sentencia.

**SÉPTIMO.-** La declaración de haber lugar al recurso de casación interpuesto conlleva que no formulemos expresa condena al pago de las costas causadas en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la LRJCA .

VISTOS los preceptos y jurisprudencia citados, así como los de pertinente aplicación.

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

## FALLAMOS

1º.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al Recurso de Casación nº 3382/2014 interpuesto por la entidad SPOBEG ANSTALT contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de Málaga, en fecha de 3 de marzo de 2014 , en el Recurso Contencioso-administrativo nº 678/2010.

2º.- Que debemos anular, y anulamos y casamos, la citada sentencia.

3º.- Que debemos devolver las actuaciones a la Sala de instancia a fin de que, con anterioridad al dictado de la sentencia, se habilite un trámite para que la entidad recurrente pueda subsanar el defecto observado, o bien, exponer las razones por las que considera suficientemente cumplido dicho trámite.

4º.- Que no hacemos expresa imposición de las costas causadas en la instancia y en casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Valverde Jose Juan Suay Rincon Cesar Tolosa Tribiño Francisco Jose Navarro Sanchis Jesus Ernesto Peces Morate Mariano de Oro-Pulido y Lopez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.